



Pandemia de autoritarismos

La emisión diaria de un programa presidencial que en costos y decisiones está colapsando el sistema económico y político, bajo la falsa ilusión de que la aparición del presidente en una pantalla suple la incapacidad de su gobierno de liderar el país en uno de sus momentos más coyunturales; la reproducción escandalosa de decretos y normas que en cien días han emitido más decisiones que en toda la época postconstitucional, que en el fondo, por más subsidiarias que parezcan, terminan beneficiando a los grandes productores e inversionistas y no garantizando sustento al tejido social; la sistemática corrupción, que se resiste a morir, terminó mudándose a escenarios COVID, alterando precios de compra de ayudas alimentarias e insumos de salud y aseo, y promoviendo contrataciones improcedentes; todas estas, entre otras, son el caldo de cultivo de la improvisación de los mandatarios locales que se estrenaron con esta crisis, en la cual muchos han asumido la situación de salud pública con prácticas autoritarias y temerarias, haciendo que esta pandemia pase a la historia no solo por el elevado número de víctimas mortales, la crisis sanitaria y alimentaria, sino también por su exceso de autoritarismo.

La democracia liberal en el marco de la cual construimos nuestro proyecto de vida tiene como base el respeto por la libertad, la consolidación de los derechos humanos y el bienestar social, y al Estado, como autor legítimo, le compete activar acciones sostenidas para que esto sea una realidad en la vida de cada ciudadano y ciudadana, donde el discurso sancionatorio, el uso de la fuerza persuasiva y la coerción normativa no pueden, ni deben, ser el fin último, sino medios posibles de usar solo cuando el bien mayor, que es la protección integral de la vida de los habitantes, lo requiera; eso sí, respetando los marcos internacionales y nacionales, poniendo en frente la dignidad humana, recordando siempre tener acciones afirmativas con quienes están en situaciones más vulnerables, garantizando espacios participativos y deliberativos de la ciudadanía y evaluando qué se quiere hacer, por qué se hace y qué resultados debe tener a corto, mediano y largo plazo.

Hace muchos años, y de muchas maneras, hemos demandado la crisis de la democracia, en prácticas tales como: el control capitalista sobre los Estados y la desigualdad y la pobreza extrema como estrategia del mercado y del poder global; el crecimiento del aparato militarista en contravía del empoderamiento ciudadano; el abandono de la atención sanitaria y social, cambiándola por la venta de servicios de salud; el uso del poder político, de parte de clanes empresariales y expresiones mafiosas; y el fuerte daño irracional al entorno ambiental como política deliberada de la producción. Lo grave es que no se ve una opción de mejorar esta situación en un futuro cercano.



En 100 días todos esos vicios antidemocráticos han salido a la palestra pública, al mismo tiempo y con sus efectos más devastadores, no solamente constatando que la democracia esta en crisis, sino que es un sistema tan frágil que rápidamente puede ser usurpado en varios niveles y de las maneras menos pensadas, ante la mirada atónita de sus afectados que, a veces, parece no reaccionan a este aniquilamiento del modelo de sociedad que actúa para instaurar uno impuesto, el cual no es fruto de nuestros ideales mas originarios de bienestar y justicia social, sino el de sus intereses privados.

Quisiera señalar que esta situación autoritarista, ha dado combustible a neófitos mandatarios y políticos locales, que gobiernan y legislan con mano dura a la ciudadanía y con permisividad a los responsables de la crisis social, que más o menos en alcaldía y gobernaciones, pero también en el Congreso, funcionan con el siguiente libreto:

En primer lugar, el afán desmedido, tan pronto salió la pandemia, de producir y expedir decretos y normas para asegurar la inversión y el capital, bajo el pretexto de prepararnos para la crisis, olvidando cultivar la cultura ciudadana y ofrecer respuestas estructurales que no solo mitiguen la situación coyuntural, sino que previnieran daños abismales cuando se estuvieran reactivando los diferentes sectores.

En segundo lugar, el uso desmedido de los medios de comunicación, no solo apropiándose de grandes franjas públicas para pronunciamientos inútiles que funcionan más como control coercitivo, sino para desinformar a la ciudadanía o dar información parcializada, protegiendo así algunas familias inversionistas en perjuicio de las buenas prácticas preventivas y satanizando a la crítica social, mostrándola enemiga del bienestar.

En tercer lugar, la falta de pulcritud en el uso de recursos, que no corresponde a una planeación de contingencia o a alivianar el problema estructural, haciendo compras no planeadas, entregando ayudas de manera desordenada, con contenidos de uso poco efectivo para el bienestar de quien las recibe, y acompañándolas de proselitismo y eternas publicaciones de generosidad fingida en las redes sociales y páginas estatales, que le hacen sentir al ciudadano no que está siendo atendido por un plan complementario de ayuda para mitigar al crisis, sino que está siendo favorecido por una acción de caridad política.

En cuarto lugar y no menos grave, el cierre de puertas, de parte de la clase política, a la participación y consulta ciudadana para identificar buenas prácticas, ideas y lecciones aprendidas que pueden ayudar a mitigar la crisis; y, por otro lado, su indiferencia a agendas sociales que parece que han declarado en “aislamiento”, como la protección a los



derechos humanos, el respeto por la intimidad y el libre desarrollo de la personalidad, y las garantías de acceso a servicios que permiten acceder a derechos.

Esta forma de gobernar es la que han asumido algunos mandatarios y políticos locales, quienes prefieren salir a las calles con continentes de soldados armados, en vez de cargamentos de ayuda humanitaria; quienes priorizan hacer una ley para su proselitismo punitivo o para crear un símbolo de país, y no para avanzar en materia de un plan de renta básica; que pagan altas cifras en medios de comunicación para amenazar a la ciudadanía si sale a la calle, haciéndola responsable de la propagación del virus, y no para construir cultura ciudadana; y que prefieren relacionarse con la ciudadanía desde el temor y la sanción y no desde la construcción participativa. Ellos harán que estos cuatro años el Estado de bienestar y la garantía de los derechos humanos no solo siga siendo materia pendiente en nuestro territorio, sino que se debilite lo poco ganado.

Wilson Castañeda Castro